**VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA COMISIONADA GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA, EN RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, EN LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL RECURSO DE REVISIÓN 04034/INFOEM/IP/RR/2023.**

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracciones X y XI, del Reglamento del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México, **la Comisionada Guadalupe Ramírez Peña**, emite **VOTO PARTICULAR** respecto a la resolución dictada en el recurso de revisión número **04034/INFOEM/IP/RR/2023** pronunciada por el Pleno de este Instituto ante el proyecto presentado por la suscrita **Comisionada Guadalupe Ramírez Peña**, el cual fue engrosado conforme al criterio mayoritario del Pleno, en el tenor siguiente:

1. **Antecedentes.**

En el asunto que nos ocupa, **la** **parte** **Recurrente** solicitó al **Sujeto Obligado**, le proporcionara lo siguiente:

*“SOLICITO LOS RECIBOS DE NOMINA TIMBRADOS DE TODO EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2023 DE TODO EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, DESDE INTEGRANTES DEL CABILDO, DIRECTORES, COORDINADORES, EMPLEADOS BASE, SINDICALIZADOS, CONFIANZA, CONTRATOS, EVENTUALES, POR HONORARIOS, PROTEGIENDO LOS DATOS PERSONALES DE LOS TRABAJADORES.” (Sic)*

En respuesta, el **Sujeto Obligado** proporcionó los siguientes archivos electrónicos:

**Archivos adjuntos:**

***“189\_RSOL\_TM\_2023\_RECNOM\_CD.pdf”:*** Oficio TMA/STE/574/07/2023, suscrita por la Tesorera Municipal, quien señala que se solicitó el cambio de modalidad a consulta directa por el número de hojas que se derivan de la respuesta a la solicitud, es de precisar que dicha modalidad fue aprobada en la Trigésimo Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, llevada a cabo el 3 de julio de 2023, en el acuerdo número ACT/ATLACOMULCO/EXT/COMT/34ª/ACU-SEXTO/2023.

***“oficio 430\_RES \_0189\_2023.pdf”:*** Documento de seis hojas, mediante el cual, la Titular de la Unidad de Transparencia, remite la respuesta a la persona solicitante en el sentido de que se en la Trigésimo Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, llevada a cabo el 3 de julio de 2023, se aprobó el cambio de modalidad a consulta directa en el acuerdo número ACT/ATLACOMULCO/EXT/COMT/34ª/ACU-SEXTO/2023.

***“034\_ACTEXT\_CT\_0307\_2023.pdf”:*** Acta de laTrigésimo Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, llevada a cabo el 3 de julio de 2023, en la que se aprobó el cambio de modalidad a consulta directa en el acuerdo número ACT/ATLACOMULCO/EXT/COMT/34ª/ACU-SEXTO/2023 de las solicitudes 00176/ATLACOM/IP/2023 y acumuladas.

***“189ROf609\_CambioModalidadATLACOM2023.pdf”:*** Oficio No. INFOEM/DGI/609/2023, suscrito por el director general de Informática, quien señala que la incidencia técnica para atender la solicitud de información pública 00189/ATLACOM/IP/2023, ha quedado registrada en la bitácora de incidencias, toda vez que trata de subir 8,500 fojas, lo cual sobrepasa las capacidades técnicas del sistema SAIMEX.

Es de precisar que esta circunstancia trajo como consecuencia la interposición del recurso de revisión que nos ocupa, expresando las siguientes consideraciones:

**a) Acto impugnado:**

*“EL CAMBIO DE MODALIDAD EN LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN” (Sic)*

**b) Razones o motivos de inconformidad**:

*“SOLICITE SOLAMENTE RECIBOS DE 15 DÍAS, LOS CUALES PUEDEN SER ESCANEADOS SIN NINGUN PROBLEMA, AL NO SER YO DEL MUNICIPIO DE ATLACOMULCO, ME ES COMPLICADO ACUDIR, ADEMÁS YO LOS NECESITO DE MANERA DIGITAL, NO CUENTO CON EL TIEMPO DE IR A HACER CONSULTAS.” (Sic)*

Una vez interpuesto el recurso de revisión, de las constancias que obran en el expediente del SAIMEX, se advierte que **la parte Recurrente** fue omisa en emitir sus manifestaciones en el tiempo procesal establecido para tal efecto, por lo que se tuvo por precluido su derecho y se procedió a la emisión de la resolución.

Por su parte, el **Sujeto Obligado** remitió los siguientes archivos electrónicos:

“***informe justificado*** ***SOL\_0189\_RR\_04034\_2023.pdf”:*** Documento de cuatro fojas, signado por la Titular de la Unidad de Transparencia, en el que medularmente se ratifica la respuesta proporcionada por el Tesorero Municipal, es decir, del cambio de modalidad a consulta directa.

***“ACTAS DE HECHOS 189\_2023.pdf”:*** Actas de hechos suscritas los días 7 y 10 de julio de 2023, en las que el **Sujeto Obligado** asienta que la persona solicitante no acudió a consultar la información que se puso a su disposición.

Así las cosas, el Pleno del Instituto consideró que los motivos de inconformidad aducidos por la **parte** **Recurrente** resultan **fundados**, y determinó **REVOCAR** la respuesta y ordenar la entrega de la siguiente información:

*“Primero. Resultan fundadas las razones o motivos de inconformidad hechos valer por la parte Recurrente en el recurso de revisión 04034/INFOEM/IP/RR/2023; por lo que, en términos del Considerando Cuarto de esta resolución, se REVOCA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado.*

*Segundo. Se Ordena al Sujeto Obligado haga entrega, en versión pública a la parte Recurrente, vía SAIMEX, en términos de los Considerandos Cuarto y Quinto de la presente resolución, lo siguiente:*

*a) Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por concepto de nómina (CDFI) de todo el personal adscrito al ayuntamiento de Atlacomulco, así como del personal por honorarios, de la segunda quincena de mayo de 2023.*

*b) Lista de raya de los servidores públicos eventuales adscritos al ayuntamiento de Atlacomulco, de la segunda quincena de mayo de 2023.*

*Deberá emitir el Acuerdo del Comité de Transparencia en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en el que funde y motive las razones sobre los datos que se supriman o eliminen y se ponga a disposición de la parte Recurrente.*

*En el supuesto que la lista de raya que se ordena en el inciso b), no obre en los archivos del Sujeto Obligado por no haberse generado al no actualizarse el supuesto, bastará con que así lo haga del conocimiento de la parte Recurrente, de manera fundada y motivada, en términos del artículo 19, párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, para tener por colmado el requerimiento de información.*

*Para el caso de que el Sujeto Obligado no cuente con la información que se ordena en el inciso a) relativa a los honorarios, deberá proporcionar el Acuerdo del Comité de Transparencia donde confirme la inexistencia de la información, esto de acuerdo con lo establecido en el artículo 19, párrafo tercero, 169 y 170 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios…”*

**II. Razones del Voto Particular.**

En este orden de ideas, resulta importante señalar que coincido con los términos generales planteados en la resolución toda vez que si bien es cierto, la información relativa a las remuneraciones de servidores públicos adscritos al Ayuntamiento, es de carácter público, pues involucra la prestación de servicios y ejercicio de recursos públicos; no obstante lo anterior, considero que dicha regla está sujeta a claro régimen de excepción, la cual concretamente se aprecia en el caso del personal que se encuentra adscrito a instituciones de seguridad pública con funciones operativas en atención a los consideraciones que a continuación se exponen.

Sobre este punto, debemos partir desde la máxima establecida en nuestro texto Constitucional Federal pues el artículo 21 en su párrafo noveno reconoce que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las Entidades Federativas y **los Municipios**, **cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social**.

Asimismo, señala que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

Dicha circunstancia es replicada por la Ley de Seguridad del Estado de México en su artículo 1, fracciones II, III y V, las cuales señalan que dicho ordenamiento es de orden público, de interés social y de observancia general en todo el territorio del Estado de México y tiene por objeto establecer las bases de coordinación del Estado y los Municipios con la Federación, las Entidades Federativas, Municipios y Alcaldías de la Ciudad de México; integrar el Sistema Estatal de Seguridad Pública, que a su vez contribuirá con el Sistema Nacional de Seguridad Pública; para la construcción de las bases para una plena seguridad ciudadana.

De tal suerte que con lo señalado hasta este punto se advierte que la finalidad de la función de seguridad pública indudablemente tienen como eje central a la persona humana y, por ende, contribuyen al establecimiento de la seguridad ciudadana, la cual tiene por objeto proteger a las personas; asegurar el ejercicio de su ciudadanía, sus libertades y derechos fundamentales; establecer espacios de participación social corresponsable y armónica; propiciar la solución pacífica de los conflictos interpersonales y sociales; fortalecer a las instituciones, y propiciar condiciones durables que permitan a los ciudadanos desarrollar sus capacidades, en un ambiente de paz y democracia.

Una vez acreditado el objeto de la seguridad pública, así como los sujetos encargados de ejecutar las acciones para consumar esta función, podemos observar con claridad la importancia de los elementos operativos que ejecutan estas acciones encaminadas a preservar el orden dentro de la dinámica social y podemos partir de este punto para determinar el riesgo de la divulgación de esta información y por ende, la procedencia de su clasificación como información reservada.

En primer momento podemos vislumbrar que el artículo 81, fracción II de la Ley de Seguridad del Estado de México dispone de manera expresa que toda información para la seguridad pública generada o en poder de Instituciones de Seguridad Pública o de cualquier instancia del Sistema Estatal debe clasificarse, sirve de referencia la siguiente cita:

*“****Artículo 81.-*** *Toda información para la seguridad pública generada o en poder de Instituciones de Seguridad Pública o de cualquier instancia del Sistema Estatal debe registrarse, clasificarse y tratarse de conformidad con las disposiciones aplicables. No obstante lo anterior, esta información se considerará reservada en los casos siguientes:*

*…*

***II. Aquella cuya revelación pueda ser utilizada para actualizar o potenciar una amenaza a la seguridad pública o a las instituciones del Estado de México ;”***

En armonía con esta disposición normativa, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 113, fracción I señala que deberá reservarse la información que con su publicación se comprometa a la seguridad pública y cuente con un efecto demostrable, posteriormente el artículo 140 fracción I de la Ley de Transparencia Local replica esta circunstancia de reserva, que señalan:

**“Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública:**

***Artículo 113****. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:*

***I. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable****;”*

**“Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios:**

***Artículo 140****. El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando por razones de interés público, ésta sea clasificada como reservada, conforme a los criterios siguientes:*

***I. Comprometa la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable****;”*

Correlativo a lo anterior, Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, publicados el 16 de abril de 2016 y reformados el 18 de noviembre de 2022 señalan en su numeral décimo octavo que podrá considerarse como información reservada, aquella que comprometa la seguridad pública, al poner en peligro las funciones a cargo de la Federación, la Ciudad de México, los Estados y los Municipios, tendientes a preservar y resguardar la vida, la salud, la integridad y el ejercicio de los derechos de las personas, así como para el mantenimiento del orden público.

Es crucial señalar que estos Lineamientos señalan **que es susceptible de considerarse como reservada aquella que revele datos que pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción de las instituciones encargadas de la seguridad pública**, sus planes, estrategias, tecnología, información, sistemas de comunicaciones.

Hasta este punto tenemos que los instrumentos normativos que debemos observar en estricto sentido disponen puntualmente la reserva de información para los casos en los que se revele información que pueda ser empleada para conocer la capacidad de reacción, es decir, todo lo relativo a servidores públicos operativos que integran las instituciones de seguridad pública, ya que su divulgación podría ser utilizada para actualizar o potenciar una amenaza para la seguridad pública de la sociedad; teniendo esto en cuenta y trasladando estas premisas al caso particular se estima que con la entrega de información de los servidores públicos con funciones operativas adscritos a instituciones de seguridad pública, revela información actualizada sobre el número de policías operativos en activo a la fecha de la solicitud de información y en consecuencia su estado de fuerza vigente, lo cual no sólo contraviene lo dispuesto expresamente por las disposiciones previamente insertadas, sino que, además, pone en riesgo los valores jurídicos y los principios bajo los cuales de las instituciones de seguridad pública se debe regir como son la legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución General.

En conclusión, la reserva del personal operativo procede por dos circunstancias:

1. Se identifica en términos concretos cómo es que la información requerida podría comprometer el ejercicio de sus facultades constitucionales y, con ello, la seguridad pública, en virtud de que:

a) La información podría ser aprovechada por los grupos criminales para conocer la capacidad de reacción

b) Con dicha información se revelarían a detalle las características funcionales del personal y con ello, su organización para el cumplimiento de sus funciones; y

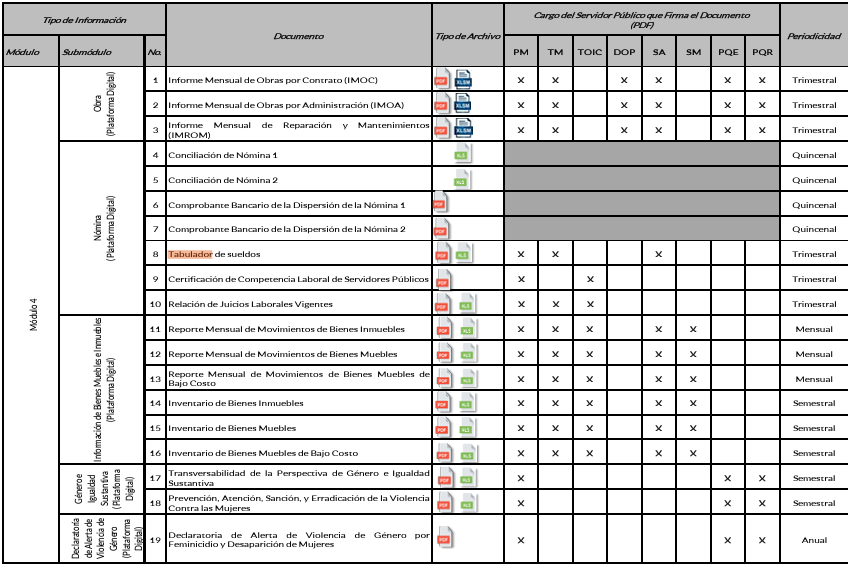
2. Existe una relación causal general entre la entrega de la información y la afectación a la seguridad pública, pues los grupos criminales estarían en posibilidad de obstaculizar o bloquear actividades encaminadas a preservar el orden dentro de la dinámica social.

Por lo tanto, entre mayor información se dé a conocer respecto del ***estado de fuerza*** con que cuentan el Estado y Municipios, mayor es la probabilidad de que la información pueda implementarse como medio para actualizar o potenciar una amenaza en contra de la seguridad pública de los mismos.

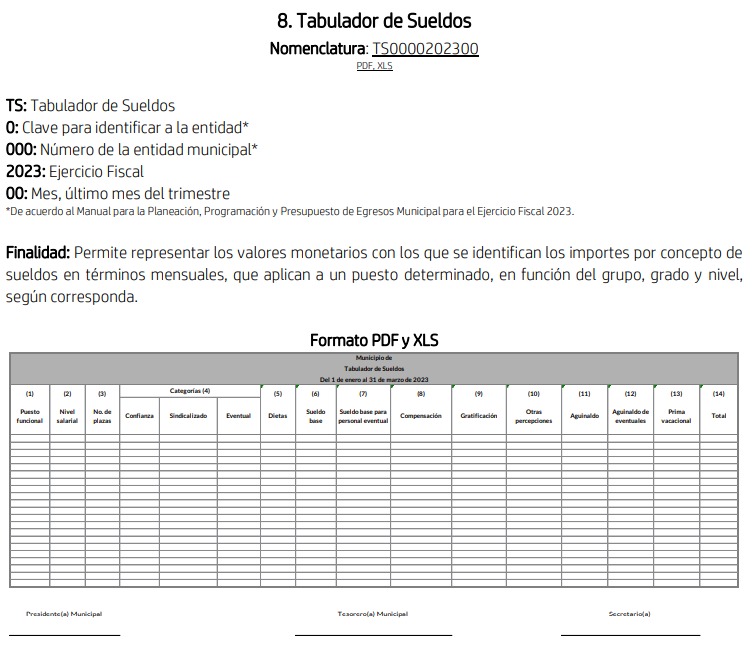
No pasa inadvertido para la suscrita que en los casos en los que se publiciten diversas notas o documentos en los que se dé a conocer información estadística sobre el número de elementos de policía con los que cuentan los ayuntamientos, esta información no se encuentra actualizada, aunado a que no se hace una distinción entre el número de personal operativo y administrativo, sin embargo, en el presente asunto, la Ponencia señala que para satisfacerse este punto, pudiera hacerse entrega de la plantilla de personal o el directorio, esto, testando los nombres de los elementos operativos.

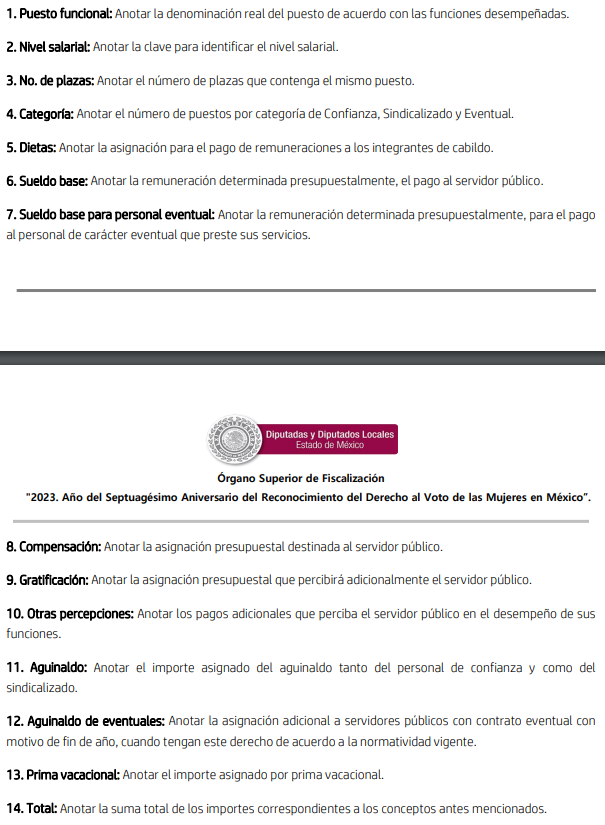
En consecuencia, la información de los elementos operativos adscrito a instituciones de seguridad pública, deben recibir un tratamiento de carácter excepcional, y esto es en razón de que, son los responsables de procurar el orden, la estabilidad y la defensa de la sociedad a la que pertenecen, por lo que, se estima que al proporcionar documentales en las que se aprecie dicha información dicha información se revela el número de servidores públicos operativos con funciones de seguridad pública activos en el Sujeto obligado; información con la que se da a conocer el estado de fuerza y la capacidad de reacción del órgano público.

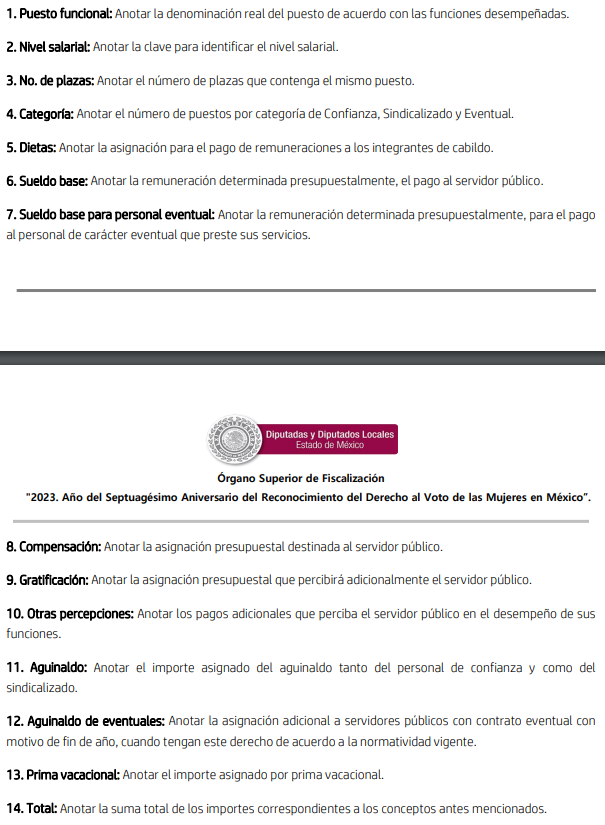
Ahora bien, la suscrita considera que es de vital importancia señalar que para los casos en los que los particulares deseen conocer las remuneraciones de los elementos operativos de las instituciones de seguridad pública, estas se pueden otorgar mediante el tabulador de sueldos, pues en este soporte se asientan los puestos funcionales y las remuneraciones, lo anterior encuentra sustento en el Instructivo del módulo 4 para la entrega del informe trimestral 2023:



Es de resaltar que en dicho documento obran los siguientes elementos:







De manera que con la consulta de este documento podrá visualizarse con claridad el cargo y la remuneración sin conocer el estado de fuerza de las entidades públicas y así no se restringe el derecho de acceso a la información de los particulares.

Es por todo lo anteriormente expuesto que considero que en las líneas argumentativas que anteceden, se acreditó de manera fehaciente que esta información debe ser reservada pues su entrega revela datos que pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción de las instituciones encargadas de la seguridad pública y **facilitaría a las células delictivas el neutralizar las acciones implementadas o por implementar para la preservación de la paz pública, afectando así su estado de fuerza, o bien les permita** realizar actos para amenazar, inhibir, extorsionar o corromper las funciones del personal operativo, lo que causaría una vulneración a la Seguridad Municipal, por lo tanto la suscrita no comparte las consideraciones vertidas en la resolución respecto del tratamiento que se le da a la información relativa a elementos operativos de instituciones de seguridad pública, y por ende formula el presente voto particular.